

Talca, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

Visto:

1° En proceso R.I.T. 291-2021, la Primer Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, el doce de julio del año en curso, dictó sentencia en contra de Francisca Andrea Andrade Salvador, Vicente Ignacio Matus Vrsalovic y Carlos Alberto Escanilla Araya, condenándolos como coautores del delito consumado de robo con homicidio en la persona de Luis Alfaro Uribe de dinero de su propiedad, perpetrado en la comuna de Maule, el día 1 de mayo de 2020, a sufrir cada uno de ellos, la pena de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como asimismo al pago proporcional de las costas.

Además a Matus Vrsalovic y Escanilla Araya, los sancionó como autores de otros delitos, los que no fueron materia del arbitrio.

En contra del fallo doña Patricia Molina Jara, Defensora Penal Privada, en representación de Carlos Escanilla Araya, don Carlos Oyarzún Selaive, Defensor Penal Público, en la de Vicente Ignacio Matus Vrsalovic y doña Verónica Arriagada Díaz, por Francisca Andrea Andrade Salvador, interponen recurso de nulidad por la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

2° La abogada doña Patricia Molina Jara señala que la sentencia recurrida agravia a su representado al resolver condenarlo, resolución que se basa en los hechos que se tuvieron por acreditados en el considerando DÉCIMO que reproduce.

Agrega que la sentencia infringe lo previsto en los artículos 433, 436 y 439 del Código Penal que tipifican el delito de robo con homicidio, al condenar por él, puesto que como ya se ha señalado se ha calificado como robo con homicidio, ilícito tipificado en el artículo 433 numeral 1, una conducta que sólo debe ser considerada como constitutiva del delito de homicidio simple, ya que no se pudo acreditar por el Ministerio Público, y por ende no se tuvo por probado hecho alguno que indicara la existencia de



una conexión funcional, entre la violencia ejercida por su defendido, y la anterior apropiación de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño, lo que implicó que a su representado se le sancionara con una pena superior a la que correspondía.

Señala que es el propio tribunal quien expresa al establecer los hechos que tuvo por acreditados, que efectivamente los imputados actúan en concierto para hacerse del dinero de la víctima, y en ese contexto es claro que su defendido estaba concertado para engañarla, con la supuesta venta de droga, y lograr así aquella estafa que se concretaba en la obtención de \$2.200.000. En efecto se procedió a la sustracción por parte de uno de los copartícipes, incluso sin precisarse, el lugar donde este dinero fue extraído, o si solo fue recogido, como uno de los testigos y los acusados declararon en el juicio, sin detenerse en el hecho que la mentada violencia no tiene conexión ideológica con la apropiación del dinero, pues de toda la prueba rendida en el juicio, da cuenta que el objetivo era lesionar a la víctima.

Entiende el sentenciador que sólo basta que la violencia sea idónea para obtener la sustracción, faltando ponderar el elemento doctrinario adicional denominado conexión funcional, el cual vincula en una relación de medio a fin, la violencia y la apropiación, sin la cual no se encuadran las conductas dentro del delito complejo de robo con homicidio.

Que dicho delito constituye una entidad delictiva compleja, en cuya estructura se integran dos conductas que consideradas separadamente son constitutivas de delito por sí mismas, pero que unidas en este tipo penal, si bien conservan los elementos que les son inherentes, pierden su autonomía para incorporarse a una nueva figura típica que es del todo indivisible, en el que el núcleo está representado por el robo, respecto del cual el homicidio, no obstante lesionar un bien jurídico más relevante, asume un rol de subordinación instrumental, en la medida que el agente lo realiza para facilitar el robo y asegurar su impunidad, existiendo por tanto una estrecha vinculación subjetiva entre el robo y el homicidio, esto es, una unidad de acción con conexión ideológica, en la cual el acto violento o intimidatorio debe estar al servicio del apoderamiento.

Cita y transcribe parcialmente doctrina.



Finalmente, solicita la declaración de nulidad de la sentencia de 22 (sic) de julio de 2022, y se dicte sin nueva audiencia pero separadamente, la de reemplazo conforme a derecho, y en consecuencia proceda a través de ella a condenar al acusado Carlos Escanilla Araya, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, de cumplimiento efectivo, más las accesorias que en derecho correspondan, como autor del delito consumado de homicidio simple en la persona de Luis Alfaro Uribe.

3° El abogado don Carlos Oyarzún Selaive fundamentando su recurso señala que la sentencia agravia a su representado al resolver condenarlo, se basa en los hechos que se tuvieron por acreditados en el considerando DÉCIMO que reproduce.

La sentencia recurrida infringe lo previsto en los artículos 433, 436 y 439 del Código Penal que tipifican el delito de robo con homicidio. Incurrir en infracciones sustanciales respecto de la interpretación de la ley y su posterior aplicación, puesto que se ha calificado como robo con homicidio, delito tipificado en el artículo 433 N° 1, una conducta que en el ordenamiento jurídico sólo debe ser considerada como constitutiva del delito de homicidio simple, ya que no se pudo acreditar por el Ministerio Público, y por ende no se tuvo por justificado hecho alguno en la causa, que indicara la existencia de una conexión funcional entre la violencia ejercida por su patrocinado y la anterior apropiación de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño.

La infracción de las disposiciones legales citadas se produce, cuando el tribunal estima que los hechos materia del juicio y que se tienen por probados, se subsumen en el tipo de robo con homicidio, sin considerar que, en la especie no concurre uno de los elementos esenciales del tipo, como es la vinculación funcional ya referida.

Que a mayor abundamiento, es el propio tribunal quien al señalar los hechos que tuvo por acreditados, establece que su patrocinado arremete violentamente solo cuando el delito de apropiación por engaño que desplegó, y al que alcanzaba el concierto, se procedió a la sustracción por parte de uno de los copartícipes, incluso sin precisarse en el propio fallo el lugar desde donde este dinero fue extraído, o si solo fue recogido como uno de los testigos declaró en el juicio, sin detenerse en el hecho que la



mencionada violencia no tiene como objetivo favorecer la impunidad de otro partícipe en la estafa, sino derechamente lesionar a la víctima, propósito conseguido por su patrocinado.

Entiende el sentenciador que sólo basta que la violencia sea idónea para obtener la sustracción, faltando, a su juicio, ponderar el elemento doctrinario adicional, denominado conexión funcional, el cual vincula en una relación de medio a fin la violencia y la apropiación, vinculación sin la cual no se encuadran las conductas dentro del delito complejo de robo con homicidio.

Es decir, “si una persona mata a otra, por razones ajenas al acto apropiatorio de bienes de la víctima, el hecho de que con posterioridad se haya efectivamente apropiado de esos bienes no transforma la conducta en un robo con homicidio.” (C. Suprema, 18 de enero de 2000, LP N° CL/JUR/3487/2000).

Cita y transcribe parcialmente doctrina y jurisprudencia.

Así, señalado todo lo anterior sostiene que en el caso sub lite, el razonamiento que lleve a una correcta interpretación de la norma en comento es el siguiente:

a) Teniendo en cuenta el estado inicial de ignorancia frente a los hechos del Juez, el cual debe ser instruido de los mismos por los intervinientes y que frente a ellos ya se formó convicción en el sentido señalado anteriormente, debe entenderse que, sólo a la calificación de estos, está obligado el tribunal.

b) Que realizado lo anterior el tribunal debe cotejar los hechos con la norma, interpretándola para buscar su verdadero sentido y alcance.

c) Que es en este proceso de aplicación del derecho, donde a su juicio se equivoca el tribunal, ya que no discurre acerca de la forma en que los hechos señalados contienen la vinculación funcional entre las lesiones causadas por su patrocinado y, la anterior apropiación de las especies.

d) Que para poder encuadrar los hechos aceptados, dentro del tipo penal del artículo 436 del Código Penal, se debe necesariamente prescindir de esta vinculación funcional entre la violencia y la apropiación, lo cual constituye derechamente una aplicación errada del tipo en comento.



e) Que debido a la inexistencia de la vinculación funcional entre la violencia y la apropiación, no cabe otra cosa que entender que en la especie sólo concurren el delito de lesiones (las que se deben calificar con posterioridad).

La influencia de los errores de derecho antes indicados en lo dispositivo del fallo son evidentes, puesto que de haberse hecho una correcta aplicación de las normas legales citadas, inequívocamente se debió haber concluido que su patrocinado sólo puede ser condenado como autor del delito de homicidio simple en contra de la víctima, lo cual como es lógico, tiene una significativa influencia en la pena a aplicar.

Finalmente solicita que se invalide la sentencia, y se dicte la correspondiente de reemplazo, que resuelva condenar a su patrocinado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito consumado de homicidio simple en la persona de Luis Alfaro Uribe.

4º La abogada doña Verónica Arriagada Díaz funda su recurso en los antecedentes de hecho y de derecho que señala, transcribiendo el motivo SEXTO de la sentencia recurrida y las pruebas de su acreditación.

El reproche de nulidad invocada lo funda en la equívoca interpretación de la calificante de responsabilidad penal establecida en los artículos 432, 433 N°1 y 439 en relación al artículo 15 del Código Penal, que dice relación con el hecho de por establecida la participación como autora del delito de robo con homicidio.

Que en el caso que nos convoca existen antecedentes claros en cuanto a la existencia de una relación entre los imputados, y asimismo Andrade Salvador mantuvo contacto con Matus Vrsalovic a objeto de planificar esta “mexicana” con el fin de sustraer con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño la sustracción del dinero de la víctima Luis Alfaro Uribe.

En definitiva, a partir de las reflexiones anteriores se puede ver cómo los imputados referidos sin planificar Francisca Andrea Andrade Salvador el homicidio e insiste sólo con el objeto de engañar a la víctima para apropiarse del dinero que portaba, es a juicio de esta defensa que se da por acreditado el delito de robo aunque es discutible en sí se está frente a la



figura penal de robo o frente a un engaño con el objeto de apropiarse del dinero de la víctima.

Lo anterior se reafirma con la declaración del funcionario policial, Inspector de la Policía de Investigaciones, Ignacio Rojas Rojas quien estuvo a cargo de la declaración prestada por el testigo Licci Heber Arellano Tapia quien declaró que los disparos fueron efectuados desde el vehículo gris de donde se baja el conductor, vehículo conducido por Matus Vrsalovic.

Además de acuerdo a la declaración del testigo, Inspector de la Policía de Investigaciones Alexis Castro Gallardo quien estuvo a cargo de la declaración de Yeremy Isamar Vera Venegas, siendo ésta también testigo presencial en el lugar de los hechos, quien señaló que efectivamente fue ella quien contacta por Facebook a Francisca Andrade Salvador a quien le dijo que tenía un amiguito y si tenía para vender, le dijo que sí (pasta) y ellos acordaron la transa por un kilo (ladrillo) avaluado en \$2,200,000 en Talca. Agrega que fue Francisca Andrade Salvador quien le pasó una muestra de la pasta a la víctima Luis Alfaro Uribe, quien sacó un cuchillo, abrió el ladrillo, percatándose que no era lo que estaba transando. En dicho momento, se bajaron el chofer de la Pancha, el otro tipo del auto blanco, ambos con armas de fuego donde el del auto blanco le abrió la puerta y dijo que esto era una mexicana y el chofer de la Pancha, abrió la puerta de la víctima y ambos comenzaron a pegar balazos al aire; luego el chofer de la Pancha le disparó directamente al pecho de la víctima Alfaro Uribe.

Finalmente solicita que se acoja el arbitrio e invalide la sentencia definitiva dictando una de reemplazo, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 385 del Código Procesal Penal.

Oído los intervinientes y considerando:

Primero: Que, en la vista del recurso doña Patricia Molina Jara, Defensora Penal Privada, don Carlos Oyarzún Selaive, Defensor Penal Público y, doña Verónica Arriagada Díaz, Defensora Penal Privada, reiteraron los argumentos en que sustentan sus pretensiones, en tanto don Carlos Olivos Muñoz, Fiscal del Ministerio Público, pidió su rechazo.

Segundo: Que, de acuerdo a lo que dispone la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, procede la declaración de nulidad del juicio oral y de la sentencia, cuando en el pronunciamiento de ella se hubiere



hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Tercero: Que, en el fundamento SEXTO del fallo que se impugna, se tiene por acreditados, entre otros, y solo en relación a los recursos, los siguientes hechos:

A.- El día 30 de abril de 2020, Jeremy Vega Venegas, a instancia de Luis Alfaro Uribe, tomó contacto con la imputada FRANCISCA ANDREA ANDRADE SALVADOR, con la finalidad que ésta consiguiera para Alfaro Uribe, un kilo de pasta base de cocaína; acordando que el precio de la droga era de \$2.200.000. Acto seguido, Francisca Andrade tomó contacto con el acusado VICENTE IGNACIO MATUS VRSALOVIC, a quien le refirió que había dinero para “pitiarse” y que debían hacer un kilo de pasta base de cocaína falso; ante lo cual Matus Vrsalovic, le señaló que contaba con movilización y armas para efectuar la operación, específicamente un revólver 38 y uno Magnum y que también participaría otro sujeto que resultó ser CARLOS ALBERTO ESCANILLA ARAYA.

B.- El día 1 de mayo de 2020, en horas de la tarde, conforme a lo acordado, Jeremy Vega, junto a Alfaro Uribe y un tercero, viajaron desde Linares a Talca, a comprar la droga; en tanto que MATUS VRSALOVIC y ESCANILLA ARAYA, movilizados en dos automóviles, uno marca Toyota y otro Chery Q, pasaron a buscar a Francisca Andrade y llevando consigo una bolsa con sustancias inertes, que aparentaba ser droga, se dirigieron a los alrededores de la Plaza Arturo Prat de esta ciudad, lugar en el que se efectuaría la supuesta transacción; punto de encuentro que luego se cambió por uno más seguro, fijándose al efecto, un sector cercano a la Villa Francia, en la comuna de Maule, al que se dirigieron en sus respectivos vehículos. Una vez en el lugar, encontrándose Alfaro Uribe y Jeremy Vega, al interior del móvil conducido por Escanilla Araya, específicamente, en el asiento trasero de éste, mientras que en el asiento del copiloto se ubicaba Francisca Andrade; al momento que Alfaro Uribe, se percata de la falsedad de la droga, el acusado Matus Vrsalovic, quien se encontraba afuera de dicho vehículo, frente a la puerta trasera del lado derecho, le dispara contra su cuerpo, a corta distancia y en dos oportunidades; luego Escanilla Araya, se baja del vehículo y disparó



también contra la víctima, en los momentos que ésta descendía de dicho móvil, impactándola en el muslo derecho; para luego apropiarse del dinero que Alfaro Uribe llevaba consigo; dándose a la fuga del lugar, los tres acusados, con el dinero en su poder, el que posteriormente fue repartido entre ellos; en tanto que la víctima fue trasladada al Hospital Regional de Talca, por sus acompañantes, falleciendo a consecuencia de una anemia aguda, trauma penetrante torácico por elemento balístico.

C.- El día 3 de mayo de 2020, en horas de la mañana, funcionarios de la Policía de Investigaciones, ejecutando una orden judicial, ingresaron al domicilio de los acusados MATUS VRSALOVIC y ESCANILLA ARAYA, ubicado en Villa La Campiña, pasaje 37 N° 509, comuna de Maule, lugar en el que éstos, mantenían respectivamente en su poder, sin autorización de la autoridad competente, un revólver marca Taurus .38 especial y otro marca Bruni, modelo Magnum y una munición.

Cuarto: Que, María Fernanda Díaz Vidal, en su memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, El robo con homicidio como hurto, señala que el profesor Antonio Bascuñán Rodríguez, en su trabajo titulado “El robo como coacción”, ha identificado tres constelaciones diferentes, en las cuales la ejecución de una apropiación mediante coacción y un homicidio, debe ser sancionada por el artículo 433 N° 1.

Refiere tres clases de robo con homicidio, que identifica en base a la expresión “con motivo u ocasión”.

Las dos primeras caen en la hipótesis del homicidio “con ocasión” del robo.

La tercera y última, que identificaría a los casos en que existe un homicidio “con motivo” del robo”, está constituida por aquellos casos en que la producción de la muerte que consuma el homicidio, reemplaza a la coacción violenta o intimidatoria como medio de la apropiación. En tanto la consumación del homicidio supone la producción de la muerte de otro, produce el efecto de suprimir completamente la capacidad de acción del custodio y, con ello, a éste como obstáculo entre el autor y el objeto que se dispone a apropiar. En este sentido, el homicidio puede llegar a ser, en un tercer grupo de casos, funcional por sí mismo a la realización de la



apropiación. Bascuñán reconoce este caso como uno en el cual la regla del artículo 433 No 1 resuelve un concurso medial entre el delito de apropiación (distinto del robo simple) y el delito de homicidio. Es decir, reconoce que en este caso, la regla del artículo 433 No 1 dispondría excepcionalmente de una pena para un caso en el que no se puede reconocer la existencia de un robo, dada la ausencia de la coacción mediante violencia o amenaza.

A diferencia de lo sostenido por Bascuñán, este sería el caso que la doctrina mayoritaria identifica como el paradigmático de la regulación del artículo 433; el homicidio cometido “con motivo” de la apropiación. Según la doctrina tradicional, el término “con motivo” señalaría una relación funcional en la cual el homicidio sirve como medio para la consumación del robo como fin.

Quinto: Que, en esta misma línea, un antiguo fallo de la Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo, sostiene que el robo con homicidio es un delito específico y, constituye una unidad indivisible, y que de este modo, el móvil del hechor debe estar referido a los dos elementos que integran este delito complejo.

Sexto: Que en estas circunstancias se observa que el Ministerio Público logró acreditar hechos que reúnen las características de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, los que debían ser encuadrados por los jueces a quo dentro del tipo penal antes indicado.

Séptimo: Que, las normas contempladas en los artículos 433 N.º 1, 436 y 439 del Código Penal, son los que castigan la conducta de los imputados y las adecuadas para la decisión de la cuestión planteada.

Octavo: Que, como resultado de estas consideraciones, resulta evidente que la causal impetrada aparece carente de fundamentos, lo que conduce inequívocamente al rechazo de los tres recursos interpuestos por la misma causal.

Por estas fundamentaciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 352, 372, 373 letra b), 384 y 386 del Código Procesal Penal, **se rechazan** sin costas, por estar privados de libertad, los recursos de nulidad interpuestos por doña Patricia Molina Jara, Defensora Penal Privada, en representación de Carlos Alberto Escanilla Araya, por don



Carlos Oyarzún Selaive, Defensor Penal Público, en la de Vicente Ignacio Matus Vrsalovic, y por doña Verónica Arriagada Díaz, por Francisca Andrea Andrade Salvador, en contra de la sentencia de doce de julio del año en curso, dictada por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en el proceso R.I.T. 291-2021, la que en consecuencia no es nula.

Redacción del Fiscal Judicial Óscar Lorca Ferraro.

Regístrese y devuélvase.

Rol 1048-2022 Penal.





XGWNXXBSCBP

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por Ministro Rodrigo Biel M., Fiscal Judicial Oscar Lorca F. y Abogado Integrante Abel Bravo B. Talca, cuatro de octubre de dos mil veintidós.

En Talca, a cuatro de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

